

GRECIA

COMENTARIO GENERAL

La vida política griega sigue girando, también en el mes de referencia, alrededor de los dos temas que han ocupado todas las primeras planas en estos últimos tiempos: el rescate de la crisis y el problema de los refugiados.

A tal respecto, el Parlamento de Grecia ha aprobado a finales de mes la ley que reforma el proceso de demanda de asilo y regula la devolución de migrantes a los llamados “países seguros”. La nueva ley actualiza las leyes griegas sobre asilo y las pone al nivel de las del resto de los países de la UE. En el apartado de Migraciones de este informe se delinearán los puntos principales de la ley.

Con los votos favorables de la coalición de Gobierno formada por Syriza y Griegos Independientes (ANEL), del Pasok (socialistas) y de Potami (centristas), la Cámara aprobó también la trasposición a la legislación nacional del acuerdo de la Unión Europea (UE) con Turquía que entró en vigor el 20 de marzo.

Para conseguir la aprobación, Tsipras ha tenido que sobreponerse a la oposición interna, ya que muchos de los diputados de Syriza habían expresado su reticencia a que Turquía fuera considerada país seguro. El texto de la ley griega no califica explícitamente de país seguro a Turquía, sino que remite a una lista de países seguros del Consejo de la UE, aún no elaborada.

El Ministro griego de Migración, Yanis Muzalas, aseguró durante el debate parlamentario que el acuerdo firmado entre la Unión Europea y Turquía para tratar la crisis de refugiados es el mejor posible «dadas las circunstancias», aunque admitió que «no se puede saber» si Turquía cumple o no el acuerdo. Muzalas aseguró que lo firmado entre Bruselas y Ankara incorpora «por primera vez una vía legal para la llegada de los refugiados», aunque confesó que si lo hubiera redactado él, el número de refugiados que los 28 deberían reubicar en sus territorios sería de 500.000.

El Ministro de Migración también resaltó que el entendimiento UE-Turquía supone un golpe a las mafias, aunque no suficiente para disolver sus redes.

La postura del Ministro de Migraciones sobre este asunto, ha sido criticada por el Ministro de Defensa y líder de ANEL, Panos Kammenos, quien ha pedido por segunda vez en dos semanas la dimisión del titular de Migración. Kammenos había demandado ya el cese de Muzalas porque en el curso de una entrevista había llamado “Macedonia” al país reconocido oficialmente por Grecia como “Antigua República Yugoslava de Macedonia” (ARYM) aunque después se disculpara del lapsus. La cuestión de Macedonia es capital para los nacionalistas helenos, ya que Grecia sólo acepta que se use ese nombre para la región norte de su país.

“ANEL no da su voto de confianza al ministro de Migración”, reiteró Kammenos en una entrevista concedida a la televisión privada ANT1. Kammenos aceptó, no obstante, que primero se celebre en el Parlamento el debate pendiente sobre corrupción antes de llevar la dimisión de Muzalas a la cámara.

Sobre los refugiados el titular de Defensa resaltó que el Ejército solo se encarga de tareas como el reparto de comida o el montaje y mantenimiento de infraestructuras en los campos de acogida organizados, en ningún caso en los informales, como es caso de Idomeni.

Kammenos insistió en que los refugiados son también “víctimas” del terrorismo yihadista, y que relacionarlos es un asunto “muy peligroso”.

En cuanto a las políticas relacionadas con la salida de la crisis, los acreedores internacionales de Grecia regresaron el día 8 a Atenas para retomar con el Gobierno heleno las negociaciones sobre la primera evaluación de las reformas vinculadas al tercer rescate, con la intención de concluir con éxito antes de mayo.

Del éxito de la evaluación no solo dependerá el desembolso de un nuevo subtramo del rescate -5.700 millones de euros- del total de 86.000 millones que puede llegar a alcanzar el programa, sino también que por fin se abra el debate sobre un alivio de la deuda, uno de los principales caballos de batalla del Gobierno de Alexis Tsipras.

Para llegar a ello habrá primero que superar una serie de escollos como, por ejemplo, ponerse de acuerdo sobre las previsiones para el déficit financiero de este y de los próximos años, unas estimaciones donde hay divergencias no solo entre Grecia y las cuatro instituciones, sino entre la parte europea de los acreedores y el FMI.

El FMI cree que para que Grecia pueda alcanzar en 2018 el superávit primario del 3,5 % del PIB acordado en el rescate deberá aprobar una serie de medidas fiscales adicionales de entre 7.500 y 9.000 millones de euros; la CE estima que solo son necesarios 5.500 millones, mientras que el Gobierno griego calcula que hacen falta 1.800 millones de euros.

El Ministro griego de Finanzas, Euclides Tsakalotos, dijo que no entiende que el FMI pida a Grecia más medidas de ajuste, en especial en el sector de las pensiones, que consideró un asunto políticamente delicado y que podría tener un impacto económico negativo. Y a primeros de mes, durante una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, el Ministro griego recalcó que Atenas ha asumido el compromiso de llevar a cabo medidas adicionales de ajuste equivalentes a un 1% del PIB que serán aprobadas a lo largo de 2016 para ser aplicadas en 2017 y 2018.

Los jefes de las instituciones acreedoras de Grecia dejaron Atenas el día 20 de marzo, acordando regresar el 2 de abril, con el fin de poder cerrar el acuerdo sobre la revisión del tercer rescate el día 11, según informó el Ministro de Trabajo, Yorgos Katrúgalos, al término de la última reunión con la “cuadriga” (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Mecanismo Europeo de Estabilidad y Fondo Monetario Internacional).

Katrúgalos señaló que, aunque no hubiera un acuerdo global, ha habido consenso en que la pensión básica se mantendrá en los 384 euros, y que no habrá reducciones en las pensiones principales actuales.

El Ministro no mencionó qué ocurrirá con las pensiones suplementarias, que para algunos jubilados pueden suponer hasta casi la mitad de sus ingresos. Según medios locales señalaron estos días que en este punto el Gobierno podría haber aceptado drásticas reducciones, de hasta el 40 %.

Katrúgalos reconoció que todavía hay divergencias significativas entre las dos partes en lo que respecta a los porcentajes de cálculo para las pensiones futuras, es decir, en cuánto descenderán. En este punto, es sobre todo el FMI el que ha planteado las mayores objeciones, añadió.

Entre los puntos que tendrán que retomar los negociadores antes de poder cerrar un acuerdo, del que dependerá el próximo desembolso de 5.700 millones de euro, figura además la reforma fiscal, el fondo de privatizaciones y la gestión de la cartera de deuda morosa de los bancos.

Por su parte, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José Ángel Gurría, ve a Grecia en el buen camino y con posibilidad de entrar ya este año en la senda del crecimiento, pero cree que son necesarias más reformas y un alivio de la deuda pública. En la presentación del Informe anual de la OCDE sobre Grecia, Gurría ha afirmado que «en 2015 los resultados económicos fueron mejor de lo que se esperaba, con un retroceso del PIB de solo el 0,3 %. (...) Calculamos que en este 2016 se logrará un estancamiento y que en 2017 se alcanzará un crecimiento del 1,9 % al 2 %».

No obstante, insistió en la necesidad de que el Gobierno mantenga el curso de las reformas y sobre todo que las aplique. «Reformas, reformas, reformas... aplicación, aplicación, aplicación», esas son, dijo, las claves para que Grecia recupere la confianza inversora y pueda incrementar las exportaciones, dos de los elementos fundamentales para lograr crecimiento. Gurría recalcó además la necesidad de que Grecia y sus acreedores lleguen a un acuerdo que permita un alivio de la deuda.

En su informe, la OCDE propone ampliar el periodo de gracia y de devolución de la deuda, recomendación que Tsipras dijo compartir plenamente.

Para el año en curso, la OCDE contempla una deuda del 183,3 % del PIB, seis décimas por debajo de 2015, y para el próximo año prevé una reducción más pronunciada, hasta el 178,6 %. En cualquier caso, estas cifras están a años luz del objetivo fijado con los acreedores al firmar el segundo rescate, que prevé una ratio de deuda del 120 % en 2022

Gurría se mostró satisfecho de cómo ha evolucionado la cooperación con el Gobierno griego, con el que hace un año firmó un acuerdo para asesorarle de cerca en el proceso de reformas y en las negociaciones con sus acreedores.

Aún así, recalcó, todavía hay una serie de capítulos en los que se debe mejorar, sobre todo en la efectividad de reformas ya aprobadas hace años, cuya puesta en práctica se ve obstaculizada en buena parte por “intereses establecidos” y por insuficiencias administrativas.

Gurría propuso además a Grecia que aborde una nueva serie de prioridades que, aseguró, arrojarán beneficios a corto plazo, como reducir los oligopolios y eliminar regulaciones.

Sin embargo, dijo, uno de los principales retos que debe afrontar ahora Grecia es garantizar que las reformas que emprende conduzcan a un crecimiento “inclusivo”, es decir que lleven a una mejora del bienestar de todos los estratos sociales.

En ese contexto, Gurría recordó que en los últimos años Grecia ha perdido una cuarta parte de su PIB y el desempleo llegó a dispararse hasta el 28 %, lo que generó una gran pobreza entre la población.

Por ello, remarcó, es necesario ahora aplicar instrumentos que permitan mejorar la vida laboral y ofrezcan protección a los más pobres y a los desempleados, como elevar el salario mínimo.

Según Gurría, las acciones para aliviar el coste social -programas de formación, subida de salario mínimo o planes para dar vivienda a los pobres- costarán previsible en torno al 1,5 % del PIB.

Tsipras recordó que el salario mínimo en Grecia está por debajo de la media de los países de la OCDE (entre 430 y 490 euros mensuales netos, en función de la edad) y abogó asimismo por recuperar la negociación colectiva como uno de esos instrumentos para obtener un crecimiento inclusivo.

Tanto el salario mínimo como la negociación colectiva eran dos grandes pilares del programa electoral del partido Syriza antes de ganar las elecciones hace un año, e iban a ser de las primeras leyes que iban a aprobarse.

